

Las odiosas comparaciones

VÍCTOR E. CALDERÓN JACOBS

El pasado cuatro de julio el presidente Carlos Salinas de Gortari hablaba en Moscú ante un grupo de parlamentarios soviéticos. Interrogado respecto a la validez de la hegemonía de su partido, el PRI, en la vida política de este país, respondió: «México es un país en el cual un partido tiene varias décadas en el poder, tal como en Italia, como en Japón, como en...»

Dicen las crónicas periodísticas que se hizo un silencio incómodo. Flotaba en el aire la tensión por la posibilidad de que el huésped dijera «la Unión Soviética» (envuelta como nadie en un proceso de democratización que, a la postre, llevó al derrumbe del partido de estado). Pero *alguien* susurró y el presidente dijo: «como en Suecia».

No hay información sobre el efecto que el símil tuvo en el público al que iba dirigido, pero vale la pena asomarse a lo que se refirió Carlos Salinas de Gortari, dada la intensidad del debate sobre la hegemonía priísta en la estructura de poder nacional.

Japón: la nueva época de la política

El origen del Japón moderno se ubica en el último cuarto del siglo pasado, cuando la dinastía Meiji restaura el poder del emperador que había sido sustituido por el de los *Shogunes* o señores feudales. La dinastía dio cuerpo a la vida constitucional en Japón, pero las diversas estructuras modernas, como los antecesores de los actuales partidos políticos, eran el sostén de un autoritarismo vertical, militarista y expansionista. Ese camino condujo, a la larga, a las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki en 1945. El agresivo Imperio del Sol Naciente queda devastado y la sociedad japonesa a la vera de la ocupación de Estados Unidos en nombre de las fuerzas aliadas.

El comando de ocupación determina que Japón reciba la asistencia necesaria para convertirse en un país desmilitarizado, capitalista, de democracia representativa y de instituciones políticas inspiradas en las de Estados Unidos. Una nueva constitución se promulga para garantizar los lineamientos del proyecto.

El máximo poder del estado se concentra en la Dieta (parlamento), integrado por una cámara alta y otra baja que eligen hombres y mujeres desde los 20 años de edad. El poder ejecutivo lo encabeza el líder del partido ganador de los comicios en la cámara baja. La vida de cada periodo legislativo es de cuatro años, pero el parlamento puede disolverlo el primer ministro para llamar a elecciones; aunque también la cámara baja puede derribar al gobierno mediante votos de desconfianza (de hecho sólo una legislatura ha completado su periodo de cuatro años).

En este ambiente las fuerzas políticas japonesas se agrupan pronto en dos grandes bandos, cada uno integrado por varios partidos: el conservador y el socialista. Ambos entienden que Japón depende de la ayuda estadounidense sin alternativas por la ocupación, y a la vez comparten por ello el proyecto capitalista y parlamentario como fórmula para rehacer al país. Sólo en 1948 el Partido Socialista gana las elecciones para la cámara baja y forma gobierno. La izquierda japonesa se define desde entonces como un contrapeso para los excesos de la derecha, pero sin cuestionar nunca la esencia de sus proyectos.

En 1952 finaliza la ocupación estadounidense y, en el 55, se declara oficialmente que «la posguerra ha terminado en Japón». El entorno internacional está marcado por la guerra de Corea y el despegue de la guerra fría entre Estados Unidos y su antigua aliada, la Unión Soviética; nación de la cual Japón se distancia para mantener su alianza con Washington y, además, porque la potencia socialista se había adueñado de territorios japoneses durante la guerra.

En este ámbito los dos grandes partidos socialistas japoneses se fusionan en 1954. Estiman que de esta manera sí pueden llegar al poder vía las elecciones, al mismo tiempo que le darán su matiz al rumbo de la nación. Las grandes empresas que financian abierta y legalmente a los partidos de su preferencia, además de otros actores políticos y sociales, presionan para lograr la unión de los dos grandes partidos derechistas japoneses: el Liberal y el Democrático.

Así, en 1955 nace el Partido Liberal Democrático con el objetivo declarado, entre otros, de: *planear y administrar un extenso programa económico basado en la creatividad personal y corporativa para estabilizar el nivel de vida de la población y alcanzar un estado de bienestar (Welfare State)*...

El Partido Liberal Democrático (PLD) dirige, desde su llegada al poder en 1955, el periodo de gran crecimiento económico de Japón, el que pronto deja de ser una nación rural para convertirse en urbana. La clase media se transforma rápidamente en la más importante en términos numéricos y políticos. Esa es la clase media que aprueba la conducción del país a la manera del PLD.

Sin embargo, las elecciones de 1955 en las que participa por vez primera el PLD como tal marcan no

sólo el arranque de la hegemonía de ese partido sino también la confirmación de la *regla dorada*, sin la cual esa hegemonía no hubiera ocurrido: el equilibrio entre las dos grandes fuerzas políticas japonesas: la centroderecha, representada por el propio PLD, y la centroizquierda, representada por el Socialista. Durante 21 años ese equilibrio se mantendría incólume. El PLD no ha perdido nunca la mayoría en la Dieta, pero esa mayoría jamás fue (ni mucho menos ha sido desde entonces) mayor del 57 por ciento.

En 1976 se inaugura la nueva época de la política japonesa. En ese año se destapa el escándalo Lockheed, es decir, la entrega ilegal de dinero de esa compañía a funcionarios del gobierno... y del PLD. Salen a debate público cuestiones por todos sabidas pero nunca asumidas, como el papel del dinero, el sexo y el espionaje en la configuración de grupos dentro del partido gobernante; lo mismo que la corrupción política y la manipulación de las elecciones primarias, de las que surge el líder partidista que será, en su caso, el primer ministro.

El fantasma de la corrupción y la turbiedad no ha abandonado al PLD desde entonces. Pero volviendo al momento, los escándalos fueron precedidos por el boicot petrolero árabe de 1973 que golpeó a Japón con dureza, ya que ese país es importador neto de energéticos. La situación se tradujo en debilitamiento económico, al que se sumaría el político para el PLD.

En las elecciones de 1976 el PLD mantuvo la mayoría relativa, pero perdió la absoluta y desde entonces se ha visto forzado a reclutar conservadores independientes o incluso miembros de los otros dos partidos centroderechistas de peso en la Dieta, para retener la mayoría y formar gobierno.

En 1990, y tras los escándalos que condujeron a la renuncia del anterior primer ministro Susuke Uno, Toshiki Kaifu llega al poder. Tiene mayoría en ambas cámaras y la sorpresa de las elecciones fue la incapacidad del Partido Socialista, encabezado por la señora Takako Doi para avanzar tanto como se esperaba. Dicen los analistas que las dos grandes fuerzas políticas de Japón, aun balanceadas, deben mejorar su oferta política porque de lo contrario el abstencionismo (nunca superior al 25% desde que entró en vigor la nueva Constitución) podría aumentar.

Y otro dato crucial: los escándalos por corrupción que ensombrecen al partido hegemónico japonés jamás han rozado siquiera a los procesos electorales de ese país.

Italia: un gobierno multipartidista

La configuración política de la Italia contemporánea comparte con Japón la piedra de toque de la Segunda Guerra Mundial, en donde ambos fueron, junto con Alemania, el eje nazifascista derrotado. Italia, como Japón, tuvo que renunciar a su pasado -en este caso monárquico y fascista- para convertirse primero en país ocupado y después (desde 1948) en una república, inicialmente tutelada por la potencia occidental y capitalista: Estados Unidos.

Del pasado subsistieron las fuerzas que habían resistido al nazifascismo y esas fuerzas ocuparon rápidamente los espacios creados por la nueva estructura. Se trata de la Democracia Cristiana, heredera del *Partito Popolare*, el Partido Socialista y el Partido Comunista.

La Constitución italiana, posterior al fascismo, estableció las reglas de un sistema de democracia parlamentaria en donde el jefe de estado tiene un poder restringido y -de nuevo al igual que en Japón- es el parlamento el que dirige los rumbos del país. Los partidos llegan al parlamento mediante la representación proporcional con objeto de impedir candados de poder. Para los críticos, esta regla es la responsable de la inestabilidad y la corta vida que ha caracterizado a tantos gobiernos italianos; pero es una regla que se mantiene por consenso.

En los 43 años desde la fundación de la República Italiana, el Partido Demócrata Cristiano (DC) ha sido, así puede considerarse, el hegemónico, aunque no ha podido ni ha querido renunciar a los vínculos que lo unen, desde los tiempos de la resistencia, a comunistas y socialistas.

Para explicar la casi permanente dirigencia del gobierno por parte de la DC, los analistas señalan -de nuevo en forma paralela al caso japonés- la conciencia ciudadana de que los beneficios del Plan Marshall de asistencia masiva, indispensables para reconstruir al país devastado, estaban íntimamente condicionados a que el país tuviera una dirección política proestadunídense. Si bien es cierto que tanto comunistas como socialistas italianos mantuvieron siempre sus distancias respecto al estalinismo soviético, la DC garantizaba mejor que nadie esa comunión.

Sea como fuere, la DC obtuvo durante muchos años la prerrogativa de formar gobierno. Ahora bien, la particularidad del caso italiano es que, en la medida en la que pasó el tiempo, y en vista de la vigencia de los planteamientos sociales y políticos tanto de socialistas como de comunistas, además de los liberales y republicanos (ubicados más a la derecha que la DC), ésta se vio forzada a compartir el gobierno. Así, Italia es un país donde si bien un partido tiene la jefatura del gobierno y la mayoría -siempre relativa- en el parlamento, en los gabinetes se incluye a representantes de las otras fuerzas políticas. Hay quien lo explica así: En Italia ningún partido puede gobernar solo.

El Plan Marshall, el descubrimiento de riqueza petrolera en el sur del país, el despegue industrial, la expansión de la clase media y luego el papel protagónico en la fundación de lo que después sería la Comunidad Económica Europea, apuntalaron el equilibrio político donde la DC figuró como fuerza dirigente.

Pero en 1981 las dificultades económicas y el desgaste de un partido que encabezó el gobierno por tanto tiempo agudizaron la inestabilidad. En virtud de los mecanismos provistos por la ley, Giovanni

Spadolini, del Partido Republicano, se convirtió en el primer representante de un partido distinto a la DC a quien se le encargó formar gobierno. Su gabinete tuvo corta vida: apenas un año.

Sin embargo, la tendencia se mantuvo y en las elecciones de 1983 la DC vio su caudal de votos reducido al 32.9 por ciento.

Bettino Craxi, del mismo Partido Socialista al que la DC se había acercado para neutralizar la fuerza del Partido Comunista (por cierto el más grande de Occidente), se convirtió en primer ministro. Se confirmó así la ruptura del monopolio de la DC pero también aquello de que en Italia ningún partido puede gobernar solo: el gabinete de Craxi incluyó a ministros de otros partidos.

Los años del gobierno encabezado por socialistas vieron el fortalecimiento de otra característica fundamental del sistema político italiano: la tendencia a demoler el centralismo que generó tanto desgaste y corrupción. Así floreció como nunca el desarrollo de los gobiernos regionales, donde la composición partidaria refleja las diferencias en la actitud de los votantes. Hoy en día, de 16 regiones, tres están bajo control de la alianza socialistascomunista y únicamente dos bajo la férula de la DC. Las otras once son alianzas diversas y multipartidistas.

Habría que decir, finalmente, que si bien la corrupción, la mafia y el terrorismo han incidido directamente en la vida política italiana (el asesinato del entonces primer ministro Aldo Moro así lo demuestra), los mecanismos electorales italianos se han mantenido por encima de toda duda.

Suecia: la pulcritud en los procesos electorales

Desde 1917 Suecia es una democracia parlamentaria. En esa fecha decidió reducir las funciones del rey a rango protocolar, con todo y que oficialmente es el jefe de estado. Ya desde entonces, Suecia era considerada, junto con los otros países nórdicos, ejemplo de desarrollo y estabilidad en lo económico, político y social. Suecia se independizó de Dinamarca en el siglo XVI y durante muchos años fue una de las potencias coloniales más importantes de Europa. La reducción de ese imperio se tradujo en una concentración de recursos hacia dentro. Suecia se volvió el epítome de la neutralidad sacando el máximo provecho posible de ello.

Desde 1917, cuando se adoptó el sistema parlamentario, se estableció que el poder recaería en una sola cámara: el *Riksdag*, y en las 23 diputaciones provinciales cuyos integrantes (de ambos) se eligen cada tres años (los últimos comicios fueron el 15 de septiembre pasado). El sistema es de representación proporcional y son electores y elegibles todos los suecos de 18 años de edad en adelante. En nivel provincial y municipal, los extranjeros empadronados durante los tres años anteriores a los comicios tienen exactamente los mismos derechos que los suecos.

El caso sueco es en verdad extraordinario. Se trata de un país donde el Partido Social Demócrata (SD) ha gobernado solo o acompañado de 1932 a 1976 y de 1982 a la fecha. Ahora bien, ello no quiere decir que otros partidos con representación parlamentaria (Conservador, Liberal, Centro, de Izquierda y -desde 1988- los Verdes) no puedan llegar al poder. Ya lo han hecho. Para explicar la hegemonía de la SD algunos señalan los estrechos vínculos entre ese partido y un movimiento sindical vivo, actuante, que cuenta con el mayor grado de membresía del mundo: la Unión General de Trabajadores de Suecia, que se incluye en el partido, y la dirección de la Confederación General de Empleados y Funcionarios, que está completamente dominada vía elecciones internas por la SD. Debe subrayarse, igualmente, que el gobierno sueco controla el mayor sector público del mundo, cuyos ingresos representaron en 1990 el 66% del Producto Interno Bruto, lo que no quiere decir que la empresa privada no tenga un papel primordial en la configuración económica y social de Suecia. La vigencia de la SD en Suecia comparte con los partidos hegemónicos de Japón e Italia el hecho de que, a pesar de los altibajos, se trata de un partido que ha garantizado a la enorme mayoría de la población un nivel de vida hasta hace poco siempre en ascenso. Pero la característica sueca es que dicho esquema no ha resultado de la ocupación y tutela estadounidenses luego de la guerra, sino de la prioridad dada, inicialmente, al equilibrio interno, manifestado en el estado de bienestar (Welfare State), que permitió desarrollar luego un fuerte sector de exportaciones controladas, cuyos beneficios, vía altísimos impuestos y cero corrupción, se canalizaron hacia la población general. En Suecia era hasta hace muy poco extraña cualquier referencia a la pobreza.

El Partido Social Demócrata condujo siempre ese proyecto nacional, no sin sobresaltos y presiones internas. Además, las corrientes económicas y financieras internacionales han ejercido presiones intensas sobre la economía y, por ende, sobre la política sueca. Dicen analistas de ese país que la SD enfrenta hoy una gran paradoja: desde el asesinato del primer ministro Olof Palme en 1986, cuyo lugar fue ocupado por el actual jefe de gobierno Ingvar Carlsson, a quien le ha tocado poner en marcha medidas siempre reclamadas por la oposición como la reducción de ciertos impuestos y la suspensión del desmantelamiento de los reactores nucleares. La paradoja radica en que esas medidas no han fortalecido la popularidad del gobierno Social Demócrata sino que han ampliado el debate sobre la conveniencia de que se mantenga en el poder.

Otro hecho que hace peligrar la hegemonía de la SD en Suecia es haber logrado, por presión de los partidos opositores, que se aceptara su solicitud para ingresar a la Comunidad Económica Europea. En el marco de la restructuración económica, financiera y comercial del mundo, el gobierno sueco ha tenido que ceder en su política de pleno empleo para hacer frente a la inflación; ahora se

aceptan las *opciones privadas* en los campos asistenciales, casi inconcebible hace apenas dos o tres años.

Es un debate especial, correspondiente a un país único que comparte con otros la tendencia o la necesidad de recomponer estructuras sobretodo económicas vigentes. Pero, indudablemente, en Suecia hay un consenso masivo en torno a los mecanismos políticoelectorales para hacer frente a esos cambios previsibles. Hoy, los suecos están preocupados porque temen que el índice de abstencionismo, nunca mayor al diez por ciento, crezca hasta el 15.

Pero dudas sobre la pulcritud de los procesos electorales son desconocidas.